



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 48

OCTUBRE 2010

El turbulento escenario del 2011

La continuidad de una tendencia perversa

El proceso de disolución institucional de los últimos tres años, particularmente desde que se abrió el período para la renovación de cargos en las principales instituciones, quedará cubierto por una gruesa capa de remiendos y situaciones de facto para este final de año. Con esa tela opaca, sin duda se intenta recubrir la inevitable imposición de la candidatura de Ortega y la capitulación de Arnoldo Alemán y sus liberales en un nuevo acomodo espurio. Con eso se “legalizará” a una CSJ que funciona como el taparrabos legal de la imposición gubernamental y a un CSE que se encuentra en la misma desnudez en relación a las garantías democráticas de nivel casi cero para las elecciones del 2011.

Igual que ellos, la Asamblea Nacional seguirá representando su papel de impotencia política, incapaz de generar ningún proceso de saneamiento político y después de eso, el resto de la institucionalidad quedará sumida, de arriba abajo, en una subordinación funcional al manejo político de las cúpulas pactantes durante este último año. La renovación del pacto entre Ortega y Alemán se asegurará de mantener estas condiciones a buen resguardo para organizar el escenario político y las elecciones del próximo año a su propia conveniencia.

Nos aproximamos al final del penúltimo año del gobierno de Daniel Ortega. El 2011 será un año donde se confirmará o cambiará el escenario político para las próximas elecciones. Será un tiempo de balance y agitación política en torno a candidaturas, un proceso que ha iniciado de manera anticipado y que se encuentra en movimiento desde ahora. Sin embargo, la fragilidad de todo el andamiaje institucional es evidente. El ejercicio de un poder puro y duro, sin preocuparse ya por las apariencias, mantiene el tinglado en que se ha convertido la institucionalidad y precaria estabilidad del país.



PERSPECTIVAS es una publicación del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), y es parte del Observatorio de la Gobernabilidad que desarrolla esta institución. Está bajo la responsabilidad de nuestro equipo de investigadores: Elvira Cuadra, Angel Saldomando y Sofía Montenegro.

Si desea recibir la versión electrónica de este suplemento, favor dirigirse a: cinco@ibw.com.ni

La campaña y las candidaturas

Efectivamente, a falta de pan, bueno es el circo. Así, la falta de resultados efectivos en cuanto a la consolidación democrática y las políticas públicas, comienza a ser sustituida por las noticias sobre los resultados de las encuestas de opinión sobre intención de votos, las fórmulas posibles y las candidaturas de la oposición. Desde el gobierno se alimenta la idea de la inevitabilidad de Ortega desde los discursos oficiales, la omnipresencia publicitaria y la ayuda del PLC. Los puntos porcentuales de percepción favorable y sobre el voto duro del FSLN que arrojaron las últimas encuestas de opinión son los dos argumentos oficiales más importantes para sostener que Nicaragua tendrá Ortega para rato. Una suerte de crónica anunciada para un triunfo prefabricado en la ilegalidad.

Mientras el gobierno ya tiene resuelta su campaña, del lado de la oposición se vuelve cada día más apremiante la búsqueda de una candidatura con oportunidades de triunfo en un cuadro que ha sido previamente rayado y no precisamente por ellos. Pero esa candidatura debería producir un triunfo electoral por algo más que unos cuantos puntos de ventaja. Debería de lograr una mayoría inocultable de votos favorables. Esta es una condición obligada considerando su debilidad frente a la actual ley electoral, la poca credibilidad del CSE y el alto riesgo de manipulación oficial de los resultados para las próximas elecciones.

Todavía no hay nada claro en ese sentido, pero la entrada en escena de Fabio Gadea Mantilla como posible candidato único de la oposición, ha generado una situación nueva en este heterogéneo conglomerado.

Desde los acuerdos de Metrocentro I y II, la convergencia de la oposición en torno a un eje anti orteguismo y su proyecto reeleccionista parecían una alternativa casi segura; ahora esta prioridad ha quedado entre paréntesis por una nueva urgencia: todos contra Alemán. No es para menos. Alemán, es visualizado como el mejor testaferro político de



Ortega y su principal cómplice en el descalabro institucional del país. Ciertamente, durante el último año pareciera que su misión ha consistido en convertirse en el más importante obstáculo para la construcción de un consenso amplio entre las fuerzas de la oposición.

Para ser honestos habría que decir que ha logrado su cometido en parte, pues ha dejado expuestas las divisiones entre las distintas facciones del liberalismo. Pero sobre todo, ha dejado en evidencia su impotencia para constituirse en una fuerza política moderna y con liderazgo.

La candidatura de Fabio Gadea, una figura popular pero conservadora, vinculado familiarmente a Alemán, es una astilla del mismo palo que difícilmente constituye una solución de fondo al problema que vive Nicaragua. De ser electo, Gadea podría fácilmente convertirse en un nuevo Bolaños, débil y atrapado políticamente. El país ya tuvo suficiente con ese drama y no necesita otra caricatura patética. De ahí que las incertidumbres que rodean la candidatura de Fabio Gadea no son menores.

Sin embargo, esa candidatura promovida por Monteleigre en reemplazo de su propia impotencia para enfrentar a Alemán, le ha metido una cuña a la anticipada postulación que este último pretendía forzar como candidato único de la oposición a pesar de que nunca como hoy ha estado tan abajo en todas las encuestas de opinión y más atrapado en el dilema de hacerse a un lado o pactar de rodillas con Ortega.

Este proceso de defenestración de Alemán no es nuevo. En realidad el esquema de poder del pacto, el bipartidismo de facto, y el control conjunto de los caudillos sobre las instituciones comenzaron a hacer crisis desde la era Bolaños y las elecciones del 2006. Para el 2007, Alemán se vino abajo, Ortega se impuso como socio dominante del pacto y la transacción entró en receso y ha funcionado con soluciones de parche.

Ahora, Ortega nuevamente necesita a Alemán como socio minoritario del pacto para organizar bien su continuidad en el poder, por eso no hay perspectivas claras en relación a si Gadea Mantilla podrá correr en las elecciones, en cuál casilla lo hará, con que propuestas, cómo hará su campaña y eventualmente, cómo pretende gobernar en el caso que ganara. Tampoco se sabe si irá

hasta el final frente a Alemán o hará un arreglo de última hora.

La alianza patriótica antiorteguista y anti reeleccionista ha buscado delimitar el terreno elaborando un programa que posicione, entre otras fuerzas, a una izquierda democrática como referencia política. El MRS, como parte de este esfuerzo, ha evitado precipitarse en las tempranas discusiones sobre las candidaturas. Pero el tiempo irá acelerándose y el escenario se vuelve cada vez más apremiante.

Un peligro inminente

Otro de los dilemas a los que probablemente tendrá que enfrentarse la oposición es el de la legitimidad de las próximas elecciones y cuáles serán sus estrategias de acción en el caso de que el pacto abra el proceso para una Constituyente que le permita a Ortega mantenerse en el poder al menos por un año más y resolver la ilegalidad de su reelección. Dos cosas distintas, pero igualmente peligrosas.

Uno de los escenarios que se puede presentar es el de una oposición y un electorado frente al dilema de decidir si las condiciones en las que se desarrollarán las elecciones son suficientemente transparentes y confiables como para hacer valer sus votos. Este dilema pasa por la elección de los magistrados del CSE; la solución de los problemas técnicos que impiden el ejercicio del voto a los ciudadanos, tales como la emisión de las cédulas de identidad, la posibilidad de que los diferentes partidos políticos y/o las alianzas que se establezcan sean reconocidas y puedan correr con sus candidatos, que las campañas electorales se realicen con transparencia, que el sistema de aseguramiento de las elecciones (JRVs, fiscales, centros de cómputo, etc.) también funcione con transparencia el día de las elecciones y el propio CSE divulgue los resultados de acuerdo a lo que

establece la ley. Si estas condiciones no estuvieran dadas, tanto la oposición como los electores tendrán que decidir si participar en ese proceso legitimándolo, o si se verán obligados a una campaña de “no hay por quien votar”.

El otro escenario que ha venido apareciendo como una posibilidad para el 2011 en el transcurso de



los últimos días y a la luz del nuevo pacto, es el de una Constituyente que le permita a Ortega postergar el proceso electoral, mantenerse en la presidencia y legalizar finalmente sus pretensiones reeleccionistas. Si este escenario se llegara a concretar, la oposición tiene el enorme reto de definir sus estrategias de acción política y posicionarse claramente junto con la ciudadanía.

2011: un año de exhibiciones gubernamentales

Mientras tanto, el 2011 será un año en el que el gobierno exhibirá los resultados de su gestión por si o por

no. Una tarea para la cual ha comenzado a prepararse desde ahora, tal como se puede ver en el maquillaje de las estadísticas oficiales presentadas durante los últimos meses. Pero para eso no basta con las estadísticas. Algo tendrá que mostrar, sobre todo si aún quiere convencer en buena ley a algunos de los que aparecen en las encuestas de opinión como parte de los indecisos. Esta intención del gobierno Ortega obliga a realizar un riguroso examen de su administración considerando que la imputabilidad, es decir, la responsabilidad política y legal de este gobierno, es inexistente. Y la posibilidad de verificar en un debate público, abierto e informado la veracidad de las afirmaciones oficiales u oficiosas, es prácticamente nula. Ciertamente, ¿cómo debatir seriamente asuntos de política pública con un gobierno dividido entre una estructura paralela de gestión y una estructura formal?

¿Hay más o menos empleo?, ¿más o menos pobreza?, ¿qué pasó con los programas sociales?, ¿en que se usó la plata de Venezuela?, ¿cuál es el estado de la corrupción?, ¿el país es más democrático? Estas y otras preguntas más, así como las discusiones sobre la crisis política y la precariedad de las instituciones estatales, seguramente se verán opacadas por el ruido de la campaña electoral y la racha de clientelismo que seguramente acompañará a la candidatura de Ortega.

La inmediatez electoral y la importancia del mediano plazo

El escenario político que se dibuja para el 2011 tiene entonces, dos tiempos y horizontes distintos. Las elecciones, como una meta de corto plazo y las estrategias de acción política en el mediano plazo. Las elecciones no son la batalla final, hacen parte de un proceso largo, costoso e inevitable, que enfrenta a fuerzas del

pasado, autoritarias y atrasadas, con aquellas que pugnan por proyectarse y organizar el recambio hacia una democracia amplia que abra oportunidades para la modernización del país y a la justicia social.

Los resultados de salida deberían incluir: las condiciones en que se llegará a las elecciones, la legalidad y legitimidad del futuro presidente, la recomposición o cambio en el esquema bipartidista, la posibilidad de establecimiento de una tercera fuerza y la legalidad y legitimidad de los poderes del Estado. La forma en que se combinen estas variables pueda dar lugar a muchas posibilidades políticas distintas de enrumbar el proceso político del país.

Las elecciones y sus resultados no deberían convertirse en una cortina que oculte las realidades de fondo, especialmente las del día después. Es cierto que constituyen una oportunidad única pero no lo son todo. Una sociedad se construye desde diversos lugares y aportes, esto también requiere ser considerado para el día después en la definición de estrategias de acción política para la oposición.

Un contexto internacional sensible

Desde el golpe contra Chávez en el año 2000, el golpe de estado contra Mel Zelaya en el 2009 y la crisis de Ecuador en octubre pasado, la discusión internacional sobre el estado de la democracia, su defensa y consolidación ha tomado auge tanto en medios políticos, académicos y en diversos organismos multilaterales del hemisferio. La cosa no es para menos, los riesgos son altos y muy reales.

La preocupación dominante en el informe del PNUD para el 2003, era que estas democracias padecían de una baja participación e insuficiente representación. El descrédito de los partidos e instituciones era alarmante. Esta situación se ha mantenido en el tiempo como lo constata nuevamente el informe de la OEA y el PNUD de este año. A ello se han agregado nuevas inquietudes que aumentan



la fragilidad de la democracia: la permanencia de poderes facticos y la captura de la institucionalidad por parte de gobiernos electos.

Ahora la democracia debe defenderse no solamente de los nuevos golpistas militares y conservadores, si no también de gobiernos electos que usan el mandato de las urnas de forma discrecional, capturan la institucionalidad y concentran el poder.

No puede haber dos estándares para calificar a unos y otros, y eso es lo que están en discusión. De esto es lo que habla el Washington Post en un reciente editorial

donde se describe la involución democrática de Nicaragua. Si bien Estados Unidos no tiene las mejores credenciales en esta materia, la opinión del Post se hace eco de una situación que tiene raíces internas y se encuentra en el marco de este nuevo debate. No cabe duda que la administración Ortega llega “con los pies hinchados” al final de su período y a la antesala de las elecciones.

En otro país habría una crisis abierta. En Nicaragua el ejercicio de un poder puro y duro ha impedido que la crisis se incremente. Agotados los recursos políticos e institucionales de oponerse al gobierno en esta deriva, éste puso el trabuco sobre la mesa elevando los costos para cualquiera que quisiera manifestarse. Con esto mantuvo la crisis bajo control pero quedó gravemente expuesto nacional e internacionalmente. La crisis no creció sencillamente por una razón, salirse de la coexistencia fangosa impuesta por el gobierno, hacia una oposición abierta y movilizadora, habría significado violencia y represión. En la memoria colectiva hay

muchas buenas razones para no emprender ese camino hasta ahora.

La situación en que Nicaragua llega al final de este período presidencial hará que la coyuntura electoral suscite nuevamente la atención internacional, lamentablemente por razones que no tienen que ver con su calidad democrática. Los antecedentes están documentados en la OEA desde la crisis al final del gobierno Bolaños y el expediente sigue creciendo. Lo que suceda de aquí en adelante y sus consecuencias, no se le podrán atribuir esta vez a ninguna causa externa.